

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D. C., primero (1º) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

**Ref. 2018 00860 00**

**I. OBJETO DE LA DECISIÓN**

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda frente al **recurso de reposición y en subsidio apelación** formulado por la curadora *ad-litem* de la parte demandada contra el auto de fecha 20 de agosto de 2021, mediante el cual se le negó solicitud de gastos incoada.

**II. ANTECEDENTES**

1. La recurrente aduce en lo medular que sin incurrió en gasto de tiempo, sin que los mismos puedan ser cuantificados en dinero, además, que el juzgado debe tener en cuenta que el profesional litigante deja de atender procesos que si le van a generar honorarios por dedicarle tiempo a contestar las demandas de curadurías *ad-litem* que se prolongan hasta la terminación del proceso.

Aunado a lo anterior, señaló que debido a la justicia virtual se generan gastos por servicios de internet que resulta complejo cuantificar.

2. De conformidad con los artículos 110 y 319 del Código General del Proceso se corrió traslado del recurso de reposición a la parte actora quien dentro del término no se pronunció al respecto.

**III. CONSIDERACIONES**

1. Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma autoridad que profirió una decisión, para que la estudie nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

2. Como primera medida, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 48 del Código General del Proceso según el cual: *“La designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.”*

Sobre este aspecto la Corte Constitucional en el ejercicio de control constitucional a la citada norma en Sentencia C-083 de 2014 resolvió declarar exequible la expresión **“quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio.”**, tras considerar que el legislador en el marco de su libertad de configuración no desconoció los derechos fundamentales de igualdad y trabajo de los profesionales del derecho que fungen como curadores dentro de los diferentes asuntos adelantados ante la jurisdicción sin obtener contraprestación alguna, por cuanto, ello es consecuencia de la función social y el deber de solidaridad que implica el ejercicio de la profesión amén de la colaboración que debe imperar para obtener una justicia pronta y cumplida. Al respecto señaló:

*“En conclusión, para la Sala el legislador no viola los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados que son nombrados curadores ad litem, en calidad de defensores de oficio, al obligarlos a prestar sus servicios de manera gratuita (num. 7, art. 48, CGP), aunque el resto de los auxiliares de la justicia sí sean remunerados. Se trata de un trato diferente que se funda en un criterio objetivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo (asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia), por un medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo. Se reitera además, que se trata de una carga que no es desproporcionada y que, inspirada en el deber de solidaridad, permite que un grupo de personas que desempeñan una labor de dimensiones sociales (prestar servicios jurídicos), colaboren en la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta puede verse obstaculizada (C-071 de 1995).”*

Ahora bien, tampoco podría entenderse que la norma en comento al negar la remuneración a los curadores *ad-litem* supone una afectación a su mínimo vital habida cuenta que la gestión por ellos realizada no obedece propiamente a un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios regido por la exclusividad que les impida desempeñarse en otras actividades que les puedan generar un ingreso básico para subsistencia.

Con relación a este tópico la Corporación en cita expresó que: *“la Sala establece que de la disposición demandada no se deriva la exigibilidad de una remuneración mínima vial y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como curadores ad litem, conforme a los presupuestos axiológicos trazados por reiteradas decisiones de la Corte. La norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Por el contrario señala que*

*la gestión gratuita como curador ad litem es para un máximo de cinco (5) procesos y recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión.”*<sup>1</sup>

De otro lado, cabe aclarar que los conceptos de honorarios por la gestión realizada y los gastos en que se incurre durante el proceso son figuras sustancialmente distintas, en tanto que, los primeros consisten en aquellos emolumentos a cancelar por cuenta de la labor efectuada y los segundos pueden ser entendidos como esos costos que se derivan indispensables para que el juicio se lleve a cabo, los cuales deben ser autorizados por el juez en la medida los mismos se hallen probados al interior del trámite.

**3.** Conforme a las anteriores precisiones legales y jurisprudenciales, descendiendo al caso objeto de estudio se advierte que mediante auto de fecha 15 de abril de la presente anualidad se resolvió nombrar en el cargo de curador *ad-litem* de la parte demanda a la abogada Nidia Paola Arévalo, quien dentro del término legal se posesionó y contestó la demanda formulando excepciones previas y de mérito, al tiempo, realizó una solicitud de pago por gastos la cual fue negada en proveído adiado 20 de agosto de 2021.

En ese sentido, revisadas las actuaciones surtidas al interior del asunto se advierte la improsperidad del recurso formulado por cuanto se observa que la decisión objeto de censura se encuentra ajustada a derecho.

En efecto, la decisión de denegar los gastos de la curadora *ad-litem* designada en el presente asunto, es el resultado de la aplicación de la normatividad que regula la materia y es consecuente con los aspectos fácticos del caso, amen que se adoptó con observancia del debido proceso.

Como primera medida, la gestión realizada, concretamente el hecho de contestar la demanda constituye una labor propia del cargo para el que fue nombrada, pues es su deber como auxiliar de la justicia asegurar el derecho de defensa de las personas que representa, siendo así, por disposición legal no puede recibir contraprestación alguna en la medida que su desempeño debe realizarse de forma gratuita, en razón al principio de solidaridad que conlleva el ejercicio de la profesión, postura que ha sido ratificada por vía jurisprudencial.

Ahora bien, aunque la recurrente hace alusión a gastos los cuales podrían ser autorizados, de acuerdo al criterio de esta juzgadora los mismos no se encuentran acreditados en el expediente, pues si bien en el recurso se indica que la profesional del derecho invirtió tiempo dejando de lado causas que si le generan honorarios y que debe sufragar los gastos ocasionados por el servicio de internet, lo cierto es que, no se allegó elemento de convicción alguno tendiente a probar tales

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-369 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.

circunstancias; aunado al hecho que es ella misma quien manifiesta que resulta demasiado difícil cuantificarlos, sin que pueda valerse de la modalidad de trabajo que supuso las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno nacional a propósito del virus Covid-19, para pagos adicionales por cuenta de los servicios de telecomunicaciones cuando todos los actores de la justicia incluidos los despachos judiciales se encuentran desarrollando sus funciones de forma virtual, de manera que se impone mantener incólume la decisión aquí censurada.

Finalmente, frente al recurso de alzada cabe aclarar que las providencias judiciales son susceptibles de ser revisadas por el superior jerárquico únicamente en los eventos previstos en la ley, de ahí que, deba negarse su concesión, por improcedente, dado que el auto mediante el cual se deniega la solicitud de gastos de curador *ad-litem* no se encuentra dentro de los enlistados en el artículo 321 de la Ley 1564 de 2012.

#### **IV. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **V. RESUELVE**

**PRIMERO: MANTENER INCÓLUME** el auto de fecha 20 de agosto de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: NEGAR** la concesión del recurso de apelación, por improcedente.

**Notifíquese,**<sup>2</sup>

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ**  
**JUEZ**

**Firmado Por:**

---

<sup>2</sup> Esta providencia se notificó por estado No. 113 de 4 de octubre de 2021.

**Iris Mildred Gutierrez**  
**Juez Municipal**  
**Juzgado Municipal**  
**Civil 019**  
**Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ff2cff7c4f227bd5e74541c05938103ad17b39f1889b254f790e180892cdbe03**

Documento generado en 01/10/2021 05:37:30 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>